



**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: **PA-0048/2018**

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Ciudad de México, a dos de agosto de dos mil diecinueve.

Vistos los autos del expediente identificado con **número PA-0048/2018** del **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS**, con Registro Federal de Contribuyentes **RERM750209PA0**, quien incurrió en faltas administrativas no graves en el desempeño de sus funciones como Profesional Dictaminador de Servicios Especializados en el Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, recibido en esta unidad substanciadora; y:

RESULTANDOS

1. Mediante **oficio DG/311/V/276/2018** de veinte de abril de dos mil dieciocho, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública hace del conocimiento a este Órgano Interno de Control que el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** no cumplió con la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial en la modalidad de conclusión, misma que debió presentar durante el período transcurrido del día dieciséis de agosto de dos mil diecisiete al catorce de octubre de dos mil diecisiete.
2. El once de diciembre de dos mil dieciocho se recibió el **oficio AQ-11/310/1081/2019** de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por la entonces Titular del Área de Quejas de este Órgano Interno de Control en su calidad de Autoridad Investigadora, oficio a través del cual remite el **2018/INEA/DE41** en el que se determinó la probable responsabilidad en la comisión de faltas administrativas no graves del servidor público **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS**, por incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 33 fracción III y 49 fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
3. El trece de diciembre de dos mil dieciocho se emitió acuerdo de admisión de procedimiento administrativo, en términos de los artículos 113 y 208 fracciones I y II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, iniciado en contra del **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** quien en el tiempo de los hechos se desempeñó como Profesional Dictaminador de Servicios Especializados en el Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
4. Mediante el **oficio 11/310/0200/2019** de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, el Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos citó a comparecer al **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** para el desahogo de la audiencia inicial a que se refieren los artículos 193 fracción III y 208 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El trece de mayo de dos mil diecinueve se notificó al referido ciudadano en su domicilio.
5. El veintinueve de mayo de dos mil diecinueve se efectuó la audiencia inicial, diligencia a la cual el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** compareció. En dicha diligencia manifestó y ofreció pruebas que a su derecho convino en relación a los



**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: **PA-0048/2018**

hechos que se le imputaron en términos del artículo 208 fracción VII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; asimismo el Área de Quejas, compareció mediante escrito de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, quien manifestó en cuanto a aquello que favorece a su causa. Declarándose cerrada la audiencia inicial.

6. Con fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve, el Área de Responsabilidades en este Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, emitió acuerdo en el que se admitieron las pruebas ofrecidas por el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS**, las cuales se tuvieron por desahogadas en términos del artículo 208 fracción VIII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

7. Se solicitó realizar una consulta a la Secretaría de la Función Pública a efecto de conocer los antecedentes de sanción que pudiera tener el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS**, constancia que se tuvo por recepcionada en fecha tres de julio del presente año.

8. Asimismo, de conformidad al artículo 208 fracción IX de la multicitada ley se declaró abierto el período de alegatos a efecto de que en el término de cinco días hábiles las partes manifestaran lo que considerasen pertinente, plazo de tiempo que corrió del veintiocho de junio al cuatro de julio conforme a lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin computarse dentro de dicho plazo los días veintinueve y treinta de junio de dos mil diecinueve por ser sábado y domingo respectivamente.

9. El diecinueve de julio de dos mil diecinueve, se emitió acuerdo de cierre de instrucción en virtud de que no se recibió escrito alguno de las partes mediante el cual hicieran valer su derecho de presentar los alegatos que considerasen pertinentes y no existía prueba pendiente por desahogar, ni diligencia que practicar.

10. Por lo expuesto, se procede a emitir la resolución administrativa que en derecho corresponde, conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Esta Autoridad es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 37 fracciones XII, XVIII y XXIX y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 62 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 34 de su Reglamento; en correlación con el numeral 46 de la "Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal", publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de agosto de dos mil dieciocho; 1, 3 fracción XXI, 9 fracción II, 10, 90, 111, 112, 113, 208 fracción X y demás relativos y aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 3 apartado C, 5 fracción III inciso d) y 98 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, así como por el artículo 36 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, publicado



**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: PA-0048/2018

en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil dieciséis.

II. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, tal y como se determina en el artículo 2 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil dieciséis, tal y como se lee a continuación:

“Artículo 2.- El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en la Ciudad de México y tiene por objeto promover y realizar acciones para organizar e impartir la educación para adultos y de quienes no se incorporaron o abandonaron el sistema de educación regular, a través de la prestación de los servicios de alfabetización, educación primaria, secundaria, la formación para el trabajo y los demás que determinen las disposiciones jurídicas y los programas aplicables, apoyándose en la participación y la solidaridad social”.
Énfasis añadido.

En términos de los artículos 1, 3 fracción XXI, 9 fracción II y 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación al artículo 62 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, los Órganos Internos de Control son parte de la estructura administrativa de las entidades gubernamentales cuya función es promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento dentro de los entes públicos, además de que tienen la facultad sustantiva de investigar, substanciar y calificar las faltas administrativas de los servidores públicos, tal y como se preceptúa en los siguientes preceptos legales:

“Ley General de Responsabilidades Administrativas:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:
(...)

XXI.- Órganos internos de control: Las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los Órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de Servidores Públicos;
(...)

Artículo 9.- En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley:
(...)

II.- Los Órganos internos de control;
(...)



Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades
Expediente Administrativo: PA-0048/2018

Artículo 10.- Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades federativas **tendrán a su cargo**, en el ámbito de su competencia, **la investigación, substanciación y calificación de las Faltas administrativas.**

Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no graves, las Secretarías y los Órganos internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley.

En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de Faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que proceda en los términos previstos en esta Ley.
(...)

"Ley Federal de las Entidades Paraestatales:

Artículo 62.- Los órganos de control interno serán parte integrante de la estructura de las entidades paraestatales. Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión de la entidad; desarrollarán sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública, de la cual dependerán los titulares de dichos órganos y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, de acuerdo a las bases siguientes:

I.- Recibirán quejas, investigarán y, en su caso, por conducto de la persona titular del órgano de control interno o del área de responsabilidades, determinarán la responsabilidad administrativa del personal adscrito al servicio público de la entidad e impondrán las sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la materia, así como dictarán las resoluciones en los recursos de revocación que interponga el personal del servicio público de la entidad respecto de la imposición de sanciones administrativas.

Dichos órganos realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante los diversos Tribunales Federales, representando al titular de la Secretaría de la Función Pública;

(...)"

Énfasis añadido.

De conformidad al artículo 36 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de enero del año dos mil dieciséis, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos cuenta con un Órgano Interno de Control, que ejercerá las competencias y facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, para investigar y substanciar los actos u omisiones que afecten la disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia en el desempeño de los empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público, de acuerdo a lo siguiente:

"Artículo 36.- El INEA cuenta con un Órgano Interno de Control, al frente del cual su Titular será designado en los términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el ejercicio de sus facultades, **se auxiliará por los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades**, designados en los mismos términos.

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercerán las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley



**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: PA-0048/2018

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

(...)"

Énfasis añadido.

III. La conducta atribuida al entonces servidor público **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** consiste en el incumplimiento de la obligación de presentar con oportunidad su declaración de situación patrimonial de conclusión del encargo como Profesional Dictaminador de Servicios Especializados en el Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, se acredita con el formato de "AVISO DE BAJA DEL TRABAJADOR" presentada ante el Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Delegación en Zona Poniente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual se advierte que la baja del trabajador lo fue a partir del quince de agosto de dos mil diecisiete (fojas 157). De igual manera del formato de incidencia de personal con Numero de documento 00188 de fecha once de agosto de dos mil diecisiete, se observa que el servidor público **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** causa baja por terminación laboral con efectos de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete (fojas 158).

En razón de lo anterior el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** se encontraba en el supuesto establecido en el artículo 33 fracción III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la cual tenía la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial en la modalidad de conclusión en el periodo que comprendía del día dieciséis de agosto de dos mil diecisiete al catorce de octubre de dos mil diecisiete, esto en términos a lo ordenado en los artículos 108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se reproduce a continuación:

*"Artículo 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
(...)"*

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.

*Artículo 109.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:
(...)"*

III.-Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales





**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: **PA-0048/2018**

causados por los actos u omisiones. **La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.**
(...)

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y (...)
Énfasis añadido.

De los preceptos constitucionales transcritos se concluye que las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal están obligadas a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses en los términos que determina la ley.

En los artículos 1, 2 fracciones I y II, 3 fracciones IV, XIII, XIV, XV, XVIII, y XXV, 4 fracción I, 32, 33 fracción III y 49 fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establece el marco general de responsabilidades administrativas aplicable al presente asunto, al definir con precisión qué personas detentan el cargo de servidores públicos y su obligación de presentar su declaración patrimonial de conclusión en los plazos señalados en la ley, tal y como se lee a continuación:

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

Artículo 2.- Son objeto de la presente Ley:

I.- Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos;

II.- Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto;
(...)

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:
(...)

IV.- Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los Órganos internos de control. Para las Faltas administrativas graves, así como para las Faltas de particulares, lo será el Tribunal competente;
(...)



Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades
Expediente Administrativo: PA-0048/2018

XIII.- Expediente de presunta responsabilidad administrativa: El expediente derivado de la investigación que las Autoridades Investigadoras realizan en sede administrativa, al tener conocimiento de un acto u omisión posiblemente constitutivo de Faltas administrativas;

XIV.- Faltas administrativas: Las Faltas administrativas graves, las Faltas administrativas no graves; así como las Faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en esta Ley;

XV.- Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde a las Secretarías y a los Órganos internos de control;
(...)

XVIII.- Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: El instrumento en el que las autoridades investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en la presente Ley, exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad del Servidor Público o de un particular en la comisión de Faltas administrativas;
(...)

XXV.- Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
(...)

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley:

I.- Los Servidores Públicos;
(...)

Artículo 32.- Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

Artículo 33.- La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:
(...)

III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.
(...)

Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación.
(...)

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción III de este artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año.

Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en el Título Segundo del Libro Segundo de esta Ley.





**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: PA-0048/2018

Artículo 49.- Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
(...)

IV.-Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los términos establecidos por esta Ley;
(...)"
Énfasis añadido.

De las hipótesis normativas transcritas, se concluye que tienen la calidad de servidores públicos las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que toda persona que desempeña el servicio público está sujeta al marco de responsabilidades definidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; entre las cuales se encuentra la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses por la conclusión del encargo dentro de los sesenta días naturales siguientes al terminar el servicio público.

Si transcurrido el plazo de sesenta días naturales la persona obligada a presentar su declaración de conclusión no la ha realizado, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativa correspondiente, misma que será asentada en el informe de presunta responsabilidad administrativa, describiéndose los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en el marco normativo, exponiéndose de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad en la comisión de la falta administrativa.

De tal suerte, los Órganos Internos de Control tienen la facultad de sancionar los actos u omisiones señalados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y para el caso concreto de la omisión sin causa justificada en la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de conclusión, se podrá sancionar a la persona infractora de tres meses a un año de inhabilitación en el servicio público.

Finalmente, por lo que hace a la obligación expresa y puntual de toda persona que ejerce el servicio público, de presentar la declaración de situación patrimonial, mediante Acuerdo por el que se modifica el diverso que determina como obligatoria la presentación de la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos federales, por medios de comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de abril de dos mil trece y el diverso Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos federales, por medios de comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil nueve, se establece de forma indubitable la obligación normativa de todo servidor público de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses por medios electrónicos, lo cual facilita a cualquier persona el cumplimiento de su obligación pues permite a las personas que ejercen el servicio público presentar sus declaraciones en cualquier



**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: PA-0048/2018

horario, en los términos fijados en la ley, tal y como se lee a continuación:

"ACUERDO QUE DETERMINA COMO OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERALES, POR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA, UTILIZANDO PARA TAL EFECTO, FIRMA ELECTRONICA AVANZADA

TERCERA.- Los servidores públicos deberán presentar sus declaraciones ante la Secretaría, en el formato para envío por medios remotos de comunicación electrónica, utilizando únicamente el sistema DeclaraNET plus, por lo que la Secretaría no admitirá otros medios de captura y envío de las declaraciones.

Los formatos de declaración de situación patrimonial deberán obtenerse en la dirección electrónica <http://declaranet.gob.mx>.

CUARTA.- Sólo en el caso de que no existan medios remotos de comunicación electrónica en la población donde se ubique el centro de trabajo del servidor público, éste podrá presentar sus declaraciones mediante el formato impreso suscrito autógrafamente.

El servidor público deberá manifestar en su declaración, bajo protesta de decir verdad, que se encuentra en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior.
(...)

SEXTA.- El uso de medios remotos de comunicación electrónica permitirá a los servidores públicos presentar sus declaraciones en cualquier horario, dentro de los plazos establecidos por la Ley.

Al momento de la recepción de las declaraciones se emitirá un acuse de recibo electrónico, con el que se acreditará la recepción y autenticidad de la información contenida en las declaraciones, así como la fecha y hora de recepción."
Énfasis añadido.

IV. Esta Autoridad Administrativa es competente para conocer respecto de la conducta atribuible al **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS**, la cual fue calificada como falta administrativa no grave en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Por tanto, este Órgano Interno de Control tiene la potestad de admitir el informe de presunta responsabilidad administrativa; y tratándose de faltas administrativas no graves tiene la facultad de substanciar y resolver dicho procedimiento en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de acuerdo a las reglas que rigen el procedimiento de responsabilidad administrativa, de conformidad a los artículos 111, 112, 113, y 208 fracciones de la I a la XI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tal y como se aprecia a continuación:

"Artículo 111.- En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán observarse los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos.

Artículo 112.- El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Artículo 113.- La admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa interrumpirá los plazos de prescripción señalados en el artículo 74 de esta Ley y fijará la materia del procedimiento de responsabilidad administrativa.





**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: **PA-0048/2018**

Artículo 208.- En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes:

I.- La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados en el informe;

II.- En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio;

III.- Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se nombre;

IV.- Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación;

V.- El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley;

VI.- Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos;

VII.- Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes;

VIII.- Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo;

IX.- Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes;



**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: PA-0048/2018

X.- Una vez transcurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello;

XI.- La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles."
Énfasis añadido.

V. Mediante el **oficio 11/310/0200/2019** de primero de abril de dos mil diecinueve, el Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos citó a comparecer al **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** para el desahogo de la audiencia inicial.

El trece de mayo de dos mil diecinueve se notificó en el domicilio del referido ciudadano, actuación que se efectuó con el presunto responsable, quién se identificó con licencia para conducir con fotografía emitida por el Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) con Folio C 038100512.

De conformidad al artículo 193 fracción III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 35 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativo señala que se deberá notificar personalmente el acuerdo por el que se ordene la citación a la audiencia inicial del procedimiento de responsabilidad administrativa, y en caso de que la persona a quien haya de notificarse no atendiere la diligencia, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice dicha diligencia.

"Ley General de Responsabilidades Administrativas

Artículo 193. Serán notificados personalmente:
(...)

III.- El acuerdo por el que se ordene la citación a la audiencia inicial del procedimiento de responsabilidad administrativa;
(...)

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Artículo 36.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.
(...)

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio.





**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: **PA-0048/2018**

**De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito.
(...)**

Cuando las leyes respectivas así lo determinen, y se desconozca el domicilio de los titulares de los derechos afectados, tendrá efectos de notificación personal la segunda publicación del acto respectivo en el Diario Oficial de la Federación.”
Énfasis añadido

En razón de lo anterior, se dejó asentado en la cédula de notificación efectuada el trece de mayo de dos mil diecinueve que dicha diligencia se llevó a cabo con quién manifestó ser el presunto responsable el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** y dicha persona asentó de puño y letra que recibía el **oficio 11/310/0200/2019** junto con el **Expediente Administrativo PA-0048/2018**, quien en ese acto se identifica con licencia para conducir, expedida por el Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) con número de folio con Folio C 038100512.

Lo anterior cobra relevancia porque la finalidad de la notificación es la de poner de conocimiento al servidor público **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** que se sigue un procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra y precisamente la notificación tiene como propósito garantizar el derecho procesal entre las partes, por lo cual y dado lo manifestado en líneas que anteceden, se tuvo por legal en virtud de que tanto las autoridades como los particulares deben conducirse sin artificios o artimañas que lleven al engaño o error.

VI. De la revisión del expediente se desprenden diversas documentales a las cuales esta Autoridad Administrativa les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 y 159 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con relación a los artículos 1, 46 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y 93 fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en los cuales se señala que son documentos públicos todos aquellos que sean expedidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y que harán prueba plena los documentos públicos, incluyendo los digitales, razón por la cual se les da el valor probatorio pleno por encontrarse dentro del expediente administrativo citado al rubro, tal y como se señala en los siguientes preceptos legales:

“Ley General de Responsabilidades Administrativas

Artículo 118.- *En lo que no se oponga a lo dispuesto en el procedimiento de responsabilidad administrativa, será de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo o las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas, según corresponda.*

Artículo 159. *Son documentos públicos, todos aquellos que sean expedidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Son documentos privados los que no cumplan con la condición anterior.*

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Artículo 1º.- *Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por*





**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: PA-0048/2018

los tratados internacionales de que México sea parte. **A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta Ley.**

Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.

Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala Regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.

Artículo 46.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes disposiciones:

I.- Harán prueba plena la confesión expresa de las partes, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como **los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, incluyendo los digitales;** pero, si en los documentos públicos citados se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.
(...)

Cuando se trate de documentos digitales con firma electrónica distinta a una firma electrónica avanzada o sello digital, para su valoración se estará a lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, la Sala adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia del litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia.

Código Federal de Procedimientos Civiles

Artículo 93.- La ley reconoce como medios de prueba:
(...)

II.- Los documentos públicos;
(...)

Artículo 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los **expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.**

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes.

Artículo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado."
Énfasis añadido.

Con relación a los hechos que se imputan al C. **JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS**, en el expediente destacan los elementos de convicción que se citan a continuación:



**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: **PA-0048/2018**

A).- Oficio DG/311/V/276/2018 de veinte de abril de dos mil dieciocho, emitido por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública (foja 1) mediante el cual se informa a este Órgano Interno de Control la presunta responsabilidad administrativa del **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS**, en los términos siguientes:

“Al respecto, se envía relación de servidores públicos de esa Institución del Gobierno Federal, que fueron integrados al padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración de conclusión de situación patrimonial y de intereses, y que en el mes de marzo de 2018 les venció el plazo para cumplir con dicha obligación.” (sic).
Énfasis de origen.

B).- Listado de servidores públicos omisos en la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de conclusión de marzo de 2018. Dependencia: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Total de servidores públicos: 1 (foja 2).

No.	RFC	HOMO	NOMBRE	ADSCRIPCIÓN
1	RERM750209PA0	PA0	JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

“En la Ciudad de México, a veinte de abril de dos mil dieciocho, el suscrito Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, con fundamento en el artículo 72, fracciones II, VII, XIII y XVI; 78, fracciones V y X; 79, fracción I, V y VII y Sexto Transitorio del Reglamento Interior de esta Secretaría de la Función Pública.

HAGO CONSTAR

*Que una vez consultado el Registro de Servidores Públicos y concluidas las acciones que se llevaron a cabo para la detección de quienes omitieron o presentaron de manera extemporánea su declaración de situación patrimonial y de intereses ante esta Secretaría, se advierte que los servidores públicos a que se hace mención, son **OMISOS en la presentación de la declaración de conclusión** de situación patrimonial y de intereses que debieron de presentar en **OCTUBRE de 2017**, mes en el que se venció su plazo para cumplir con dicha obligación.” (sic).*
Énfasis de origen.

C).- Por lo que respecta al expediente personal del C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS, se encuentran agregados los siguientes documentos:

- ❖ Formato de Aviso de baja del trabajador expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, presentado ante el Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Delegación Zona Poniente con fecha de recepción diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. (foja 157)
- ❖ Formato de Incidencia de Personal con número de DOCTO 00188 de fecha once de agosto de dos mil diecisiete, documento con la que se acredita la calidad de servidor público del **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** con RFC **RERM750209PA0**, con el puesto de PROFESIONAL DICTAMINADOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS, adscrito al ÁREA DE AUDITORÍA PARA EL DESALLO Y MEJORA PARA LA GESTIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Área de Responsabilidades

Expediente Administrativo: PA-0048/2018

EN EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, a partir del PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE y hasta el QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. (foja 158)

- ❖ Formato de Incidencia de Personal con número de DOCTO 00131 de fecha uno de abril de dos mil catorce, documento con la que se acredita la calidad de servidor público del **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** con RFC **RERM750209PAO**, con el puesto de PROFESIONAL DICTAMINADOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS, adscrito al ÁREA DE AUDITORÍA PARA EL DESALLO Y MEJORA PARA LA GESTIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, a partir del UNO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE. (foja 169)
- ❖ Oficio número 11/310/082/2014 de fecha veintiocho de marzo de dos mil catorce, signado por el Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, mediante el cual hace de conocimiento que el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** queda como Profesional Dictaminador de Servicios Especializados, Nivel QB en el Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. (foja 170)

D).- Documentales en copias certificadas que se integran en el expediente de referencia y acreditan la personalidad jurídica del C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS, entre las cuales se identificó: i) curriculum vitae del C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS (foja 232 y 233); ii) reporte de calificaciones expedida por la Escuela Bancaria y Comercial (foja 240); iii) credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral (foja 253); iii) Clave única de Registro de Población (254); iv) clave única de registro de población **RERM 750209PAO (foja 255); v) cartilla militar expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional (foja 256); acta de nacimiento (foja 261), documentales que acreditan la personalidad jurídica del C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS.**

E).- Constancia del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho mediante la cual el personal actuante del Área de Quejas del Órgano Interno de Control señala que ingresó en la página <http://www.servidorespublicos.gob.mx>, denominada DeclaraNET plus, y se constató que el servidor público, en la fecha de referencia, no había presentado su declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de conclusión (fojas 51 a 53), tal y como se señala a continuación:

"CONSTANCIA

*"En la Ciudad de México, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día nueve de julio de dos mil dieciocho, el suscrito, C. OMAR PÉREZ CARREÓN, quién en términos del acuerdo de fecha veinticinco de abril del año en curso, en el que se solicita obtener impresión digital relativa a los acuses de las declaraciones patrimoniales del C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS. En esa misma tesitura, se ingresó a la dirección electrónica <http://www.servidorespublicos.gob.mx>, denominada DECLARANET PLUS, y se obtuvo la impresión digital en una foja útil, por una sola de sus caras, relativas al accuse de la declaración patrimonial de diversas, entre estas, inicio y modificación del servidor público referido; lo anterior con fundamento en el artículo 101 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en auxilio a la titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar." (sic).
Énfasis añadido.*



**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: **PA-0048/2018**

F).- Constancia de la presentación de declaración de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de inicio y modificación del **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS**, la cual se obtuvo en la página <http://www.servidorespublicos.gob.mx>, denominada DeclaraNET plus en el Registro de Servidores Públicos, misma que obra en el presente expediente (foja 264).

VII. De la revisión a las documentales públicas consistentes en Formato de Aviso de baja del trabajador expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, presentado ante el Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Delegación Zona Poniente con fecha de recepción diecisiete de agosto de dos mil diecisiete así como del Formato de Incidencia de Personal con número de DOCTO 00188 de fecha once de agosto de dos mil diecisiete, documento con la que se acredita la calidad de servidor público del **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** con RFC **RERM750209PA0**, con el puesto de PROFESIONAL DICTAMINADOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS, adscrito al ÁREA DE AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA PARA LA GESTIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSATITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, a partir del PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE y hasta el QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, se observa que el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS**, con Registro Federal de Contribuyentes **RERM750209PA0**, concluyó su cargo como Profesional Dictaminador de Servicios Especializados en el Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el día quince de agosto de dos mil diecisiete.

De conformidad a los artículos 33 fracción III y 49 fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el servidor público **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** tenía la obligación normativa de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de conclusión, en el término de sesenta días naturales a partir de haber concluido su encargo, por lo cual el plazo para cumplir con su deber legal fue del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete al catorce de octubre del dos mil diecisiete; situación que no aconteció, lo cual da como resultado que el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** sea omiso al no presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de conclusión como servidor público obligado en términos de la normatividad legal citada.

La condición generadora de la obligación a la cual estaba sujeto el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** se configura a partir de la copia certificada del FORMATO DE INCIDENCIAS DE PERSONAL con número de DOCTO 00188 de fecha once de agosto de dos mil diecisiete (foja 158), así como el AVISO DE BAJA DEL TRABAJADOR, la cual fuera presentado por el Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Delegación Zona Poniente, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con fecha de recepción diecisiete de agosto del dos mil diecisiete, mediante el cual se advierte que el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** se le dio de baja como servidor público adscrito al Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en el



**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: PA-0048/2018

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en fecha quince de agosto del año dos mil diecisiete (foja 157), es decir, a partir del día siguiente siendo a partir del día dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, fecha que comenzó a correr el plazo de sesenta días naturales previsto en los artículos 33 fracción III y 49 fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esto es del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete al catorce de octubre del dos mil diecisiete.

Por lo cual, se concluye que el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** tuvo el plazo de sesenta días naturales, los cuales comprendieron del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete al catorce de octubre del dos mil diecisiete, para presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de conclusión, utilizando el formato para envío por medios remotos de comunicación electrónica que se encuentra en el sistema DeclaraNET plus, en términos del Numeral Tercero del Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federales, por medios de comunicación electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil nueve.

En conclusión, esta Autoridad considera acreditado que el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS**, con Registro Federal de Contribuyentes **RERM750209PA0**, al tener dicha omisión, incumplió con la obligación establecida por los artículos 32, 33 fracción III en relación al artículo 49 fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tal y como se lee a continuación:

Artículo 32.- Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

Artículo 33.- La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:
(...)

III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.
(...)

Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación.
(...)

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción III de este artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año.

Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en el Título Segundo del Libro Segundo de esta Ley.





**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: **PA-0048/2018**

Artículo 49.- Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
(...)

IV.-Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los términos establecidos por esta Ley;
(...)"
Énfasis añadido.

VIII. El día veintinueve de mayo de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia inicial que enmarca el artículo 208 fracciones II y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a la cual el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** compareció. En dicha diligencia manifestó y ofreció pruebas que a su derecho convino en relación a los hechos que se le imputaron en términos del artículo 208 fracción VII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; asimismo la autoridad investigadora, compareció a través de escrito y se manifestaron en cuanto a aquello que favorece a su causa; declarándose cerrada la audiencia inicial.

En términos de los numerales cuarto y sexto del acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federales, por medios de comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil nueve, el servidor **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** presentó como medios de prueba: copia simple de la demanda laboral instaurada en contra del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos de fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, así como contestación de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho; así también, fueron presentadas copias simples de las licencias médicas de las cuales se detallan a continuación: a) serie No. 092LM0812595 de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecisiete; b) serie No. 092LM0832993 de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete; c) serie No. 092LM0833016 de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete; d) serie No. 092LM0833262 de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete; e) serie No. 092LM0833334 de fecha once de septiembre de dos mil diecisiete y f) serie No. 092LM0833450 de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete; documentales que gozan de eficiencia probatoria plena de conformidad con los artículos 130, 133, 136, 158 y 159 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo de aplicación supletoria a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Cabe mencionar que es causa de justificación la omisión de la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses en medios electrónicos, en su modalidad de conclusión, cuando no existan medios remotos de comunicación electrónica en la población donde se ubique el centro de trabajo del servidor público, por tanto, las personas que ejercen el servicio público podrán presentar sus declaraciones mediante el formato impreso suscrito, autógrafamente y el servidor público deberá manifestar en su declaración, bajo protesta de decir verdad, que se encuentra en el supuesto a que se refiere dicha hipótesis normativa; y en el caso que nos ocupa el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** no presentó ningún medio de



**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: **PA-0048/2018**

convicción que la ubique en el caso de excepción a la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses en medios electrónicos.

Es relevante señalar que no obstante que el servidor público referido acudió a la audiencia inicial el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve del cual se advierte que ofreció pruebas que a su derecho convino en relación a los hechos que se le imputaron, como resultado de la consulta en la página <http://www.servidorespublicos.gob.mx>, denominada DeclaraNET plus se constató que el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** tuvo la oportunidad de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de conclusión el día veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, pero persistió en la omisión de la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses de conclusión.

No pasa desapercibido para esta Autoridad que en la audiencia inicial de fecha veintinueve de mayo del presente año, en uso de la palabra el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** manifestó que no es procedente la presentación de declaración de situación patrimonial por conclusión, toda vez que del expediente no se advierte su renuncia o escrito en el cual se haya notificado su despido, haciendo de conocimiento a esta autoridad que inició una demanda laboral ante la Junta Especial número 14 bis de la Federación de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado, señalando que se encontraba de incapacidad en los días que según dice abandonó sus actividades laborales.

En consecuencia de lo anterior y dadas las manifestaciones realizadas por el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** mediante el cual informa sobre la demanda laboral que inició en contra del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, es de advertirse que dicho procedimiento laboral no es impedimento legal para que esta Autoridad resuelva sobre la falta no grave en la que incurrió el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS**, consistente en la omisión de la presentación de declaración de situación patrimonial y de intereses de conclusión, pues la demanda laboral que presentó en contra del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, no es una causa de justificación en la omisión de presentar su declaración de situación patrimonial por conclusión, en virtud de que solamente se deben atender causas extraordinarias para proceder en el incumplimiento de sus obligaciones, las cuales están consagradas en el artículo 33 fracción III y 49 fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cual permitiría justificar dicha omisión en términos de criterios sustentados por el Poder Judicial de la Federación de conformidad a la Tesis: Décima Época; Registro: 2016724; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 53, Abril de 2018, Tomo III; Materia(s): Administrativa; Tesis: I.7o.A.168 A (10a.); Página: 1925, cuyo rubro y parte sustantiva se transcriben a continuación:

"DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE CONCLUSIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN, DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS EN LOS CUALES SE ACREDITE QUE EL OBLIGADO ESTUVO INCAPACITADO FÍSICA O MENTALMENTE PARA HACERLO, POR PADECER UNA ENFERMEDAD.





**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: **PA-0048/2018**

Una obligación de los servidores públicos es presentar su declaración de situación patrimonial de conclusión dentro de los sesenta días naturales siguientes a la terminación del encargo, cuyo incumplimiento se sanciona con la inhabilitación de seis meses a un año para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en la administración pública, en términos del artículo 37, fracción II y sexto párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos abrogada. Sin embargo, en el supuesto de que el servidor público acredite que durante ese lapso padeció una enfermedad que lo incapacitó física o mentalmente para cumplir con dicha obligación, al ponderarse la exigencia de acatar ésta, con el derecho humano a la protección de la salud, previsto en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que implica la obtención de un estado integral de bienestar físico, mental y social, así como la ausencia de enfermedades, su tratamiento oportuno, o bien, su seguimiento, deben descontarse del plazo para presentar la declaración los días en los cuales se dio esa situación extraordinaria, pues solamente de esa manera se da operatividad al derecho fundamental mencionado." (sic)
Énfasis añadido.

Ahora bien, es necesario hacer mención que esta autoridad está impedida para pronunciarse a fondo del asunto laboral al que hace mención el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS**, toda vez que, de la presunta demanda laboral en contra del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, no es de competencia ni de facultades ejercidas por este Órgano Interno de Control, pues las mismas se encuentran consagradas en los artículos 1, 3 fracción XXI, 9 fracción II y 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 3 apartado C, 5 fracción II inciso f) y 98 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, así como por el artículo 36 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil dieciséis.

Por lo señalado anteriormente, este Órgano Interno de Control determina acreditado el incumplimiento a obligaciones del servicio público imputado al servidor público **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS**.

El ejercicio de tal potestad no puede ejercerse de manera arbitraria o caprichosa, pues las facultades discrecionales se encuentran subordinadas a las garantías de fundamentación y motivación ordenadas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de acuerdo a la siguiente Tesis: Sexta Época; Registro: 267022; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Volumen LVII, Tercera Parte; Materia(s): Administrativa; Tesis: Página: 65, cuyo rubro y parte sustantiva se transcriben a continuación:

"FACULTADES DISCRECIONALES.

La Segunda Sala de la Suprema Corte ha establecido que si bien el ejercicio de la facultad discrecional está subordinado a la regla del artículo 16 de la Constitución Federal, en cuanto este precepto impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar los actos que puedan traducirse en molestias a la posesión y derechos de los particulares, y aunque dicho ejercicio suponga un juicio subjetivo del autor del acto que no puede ni debe sustituirse por el criterio del Juez, si está sujeto al control de este último, por lo menos cuando el juicio subjetivo no es razonable, sino arbitrario y caprichoso y cuando es notoriamente injusto o contrario a la equidad, pudiendo añadirse que dicho control es procedente cuando en el referido juicio no se hayan tomado en cuenta las circunstancias de hecho, o sean



**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**

Expediente Administrativo: **PA-0048/2018**

alteradas injustificadamente, así como en los casos en que el razonamiento sea ilógico o contrario a los principios generales del derecho."
Énfasis añadido.

En tal orden de ideas, para satisfacer la debida fundamentación y motivación ordenada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se debe efectuar un juicio de razonabilidad acotado por las siguientes reglas: **i)** analizar las circunstancias del hecho; **ii)** apoyarse en hechos exactos; **iii)** seguir las reglas del razonamiento lógico y **iv)** apegarse a los principios generales del derecho; de conformidad al contenido del criterio jurisprudencial citado anteriormente.

IX. Acreditado el incumplimiento de obligaciones imputables al servidor público **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** con Registro Federal de Contribuyentes **RERM750209PA0**, se aprecian las siguientes circunstancias de tiempo, modo y lugar:

A).- Tiempo: La obligación de la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de conclusión, es dentro de los sesenta días naturales siguientes a la finalización del encargo en el servicio público, y en el caso concreto este plazo corrió del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete al catorce de octubre del dos mil diecisiete; lapso de tiempo en el cual el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** tenía el mandato legal de presentar su declaración en el formato para envío por medios remotos de comunicación electrónica utilizando el sistema DeclaraNET plus, lo cual facilita a toda persona que ejerce el servicio público la posibilidad de presentar sus declaraciones en cualquier horario dentro de los plazos establecidos en la ley.

B).- Modo: El **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS**, en el desempeño de sus funciones como Profesional Dictaminador de Servicios Especializados en el Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, tenía el mandato legal de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de conclusión, mediante los medios remotos de comunicación electrónica que permiten la captura y el envío de las declaraciones, además de que con ello se genera un acuse de recibo electrónico con la fecha y hora de recepción; y en el caso que se analiza el servidor público referido fue omiso en el cumplimiento de su deber legal, transgrediendo con ello sus obligaciones como servidor público.

C).- Lugar: Con relación al lugar donde acontecieron los hechos, de conformidad al Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federales, por medios de comunicación electrónica publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil nueve, señala en su numeral cuarto que sólo en el caso de que no existan medios remotos de comunicación electrónica en la población donde se ubique el centro de trabajo del servidor público, éste podrá presentar sus declaraciones mediante el formato impreso suscrito autógrafamente.

X. Acreditado el incumplimiento de obligaciones imputables al servidor público **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** con Registro Federal de Contribuyentes



**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: PA-0048/2018

RERM750209PA0, y determinadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, se hace procedente individualizar la sanción imponible al servidor público referido, de conformidad al artículo 76 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismo que se reproduce a continuación:

Artículo 76.- Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes:

I.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio;

II.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y

III.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

En caso de reincidencia de Faltas administrativas no graves, la sanción que imponga el Órgano interno de control no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad.

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo."

Énfasis añadido.

Se procede al análisis del encuadre de la conducta con la individualización de la sanción, tomando en cuenta los criterios determinados en el artículo 76 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

A).- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio. Al momento de la omisión del deber legal, el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** se desempeñaba como Profesional Dictaminador de Servicios Especializados en el Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, tal y como se advierte del Formato de Incidencias de Personal con número de DOCTO 00131 de fecha uno de abril de dos mil catorce, visible a fojas 169, se desempeñó con dicho cargo, por lo que el servidor público estaba consciente de la responsabilidad que conlleva el actuar conforme a la normatividad y obligaciones que rigen el servicio público, motivo por el cual, el incumplimiento a sus obligaciones como servidor público no puede ser excusable.

B).- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución. Se observa que en el expediente de la causa no existe prueba que acredite la excepción señalada en el Numeral Tercero del Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federales, por medios de comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil nueve, que establece que sólo en el caso de que no existan medios remotos de comunicación electrónica en la población donde se ubique el centro de trabajo del servidor público, éste podrá presentar sus declaraciones mediante el formato impreso suscrito autógrafamente.



**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: **PA-0048/2018**

Tampoco se desprende la existencia de alguna causa extraordinaria que justifique al servidor público a proceder en incumplimiento de sus obligaciones consagradas en el artículo 33 fracción III con relación del 49 fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cual permitiría justificar dicha omisión en términos de criterios sustentados por el Poder judicial de la Federación de conformidad a la Tesis: Décima Época; Registro: 2016724; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 53, Abril de 2018, Tomo III; Materia(s): Administrativa; Tesis: I.7o.A.168 A (10a.); Página: 1925, cuyo rubro y parte sustantiva se transcriben a continuación:

"DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE CONCLUSIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN, DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS EN LOS CUALES SE ACREDITE QUE EL OBLIGADO ESTUVO INCAPACITADO FÍSICA O MENTALMENTE PARA HACERLO, POR PADECER UNA ENFERMEDAD.

Una obligación de los servidores públicos es presentar su declaración de situación patrimonial de conclusión dentro de los sesenta días naturales siguientes a la terminación del encargo, cuyo incumplimiento se sanciona con la inhabilitación de seis meses a un año para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en la administración pública, en términos del artículo 37, fracción II y sexto párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos abrogada. Sin embargo, en el supuesto de que el servidor público acredite que durante ese lapso padeció una enfermedad que lo incapacitó física o mentalmente para cumplir con dicha obligación, al ponderarse la exigencia de acatar ésta, con el derecho humano a la protección de la salud, previsto en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que implica la obtención de un estado integral de bienestar físico, mental y social, así como la ausencia de enfermedades, su tratamiento oportuno, o bien, su seguimiento, deben descontarse del plazo para presentar la declaración los días en los cuales se dio esa situación extraordinaria, pues solamente de esa manera se da operatividad al derecho fundamental mencionado." (sic)
Énfasis añadido.

La omisión del servidor público referido resulta contraria a las obligaciones que guían el servicio público, más aún cuando la finalidad de la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de conclusión, es garantizar el debido ejercicio del servicio por parte de los servidores públicos, de conformidad con los principios de legalidad, responsabilidad, transparencia, equidad e igualdad ante la ley; de tal manera que dicha declaración se constituye en el instrumento para evaluar en forma periódica la evolución patrimonial de quienes están obligados a formularlas y detectar posibles irregularidades en que hayan incurrido, instituyéndose en eficaces instrumentos junto con otras acciones preventivas de fiscalización, inhibir prácticas corruptas y de enriquecimiento inexplicable o ilícito.

C).- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Se solicitó realizar una consulta a la Secretaría de la Función Pública a efecto de conocer los antecedentes de sanción que pudiera tener el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** con número de Registro Federal de Contribuyentes **RERM750209PA0**, del cual se advierte que no existen antecedentes de sanción para el **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** lo cual será tomado en cuenta al momento de imponer la sanción correspondiente.





**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: **PA-0048/2018**

SANCIÓN ADMINISTRATIVA: Por lo expuesto, tomando en cuenta que se han ponderado tanto los elementos objetivos (circunstancias en que la omisión se desarrolló) y subjetivos (antecedentes y condiciones particulares del servidor público y la inexistencia de causas de justificación que pudieran favorecerla), conforme al caso concreto, cuidando que no sea el resultado de un enunciado literal o dogmático de lo que la ley ordena y procurando que la sanción sea pertinente, justa, proporcional y no excesiva, conforme a los criterios de fundamentación y motivación del derecho administrativo sancionador que se orienta bajo criterios del Poder Judicial de la Federación, mediante tesis: Novena Época; Registro: 170605; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVI, Diciembre de 2007; Materia(s): Administrativa; Tesis: I.4o.A.604 A; Página: 1812, cuyo rubro y parte sustantiva se transcriben a continuación:

"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA QUE SE CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, LA AUTORIDAD DEBE PONDERAR TANTO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS COMO LOS SUBJETIVOS DEL CASO CONCRETO.

Tanto los principios como las técnicas garantistas desarrolladas por el derecho penal son aplicables al derecho administrativo sancionador, en virtud de que ambos son manifestaciones del ius puniendi del Estado. Así, al aplicarse sanciones administrativas deben considerarse los elementos previstos por el derecho penal para la individualización de la pena, que señalan al juzgador su obligación de ponderar tanto aspectos objetivos (circunstancias de ejecución y gravedad del hecho ilícito) como subjetivos (condiciones personales del agente, peligrosidad, móviles, atenuantes, agravantes, etcétera), pues de lo contrario, la falta de razones suficientes impedirá al servidor público sancionado conocer los criterios fundamentales de la decisión, aunque le permita cuestionarla, lo que trascenderá en una indebida motivación en el aspecto material. En ese contexto, para que una sanción administrativa se considere debidamente fundada y motivada, no basta que la autoridad cite el precepto que la obliga a tomar en cuenta determinados aspectos, sino que esa valoración debe justificar realmente la sanción impuesta, es decir, para obtener realmente el grado de responsabilidad del servidor público en forma acorde y congruente, aquélla debe ponderar todos los elementos objetivos (circunstancias en que la conducta se ejecutó) y subjetivos (antecedentes y condiciones particulares del servidor público y las atenuantes que pudieran favorecerlo), conforme al caso concreto, cuidando que no sea el resultado de un enunciado literal o dogmático de lo que la ley ordena, y así la sanción sea pertinente, justa, proporcional y no excesiva. En ese tenor, aun cuando la autoridad cuente con arbitrio para imponer sanciones, éste no es irrestricto, pues debe fundar y motivar con suficiencia el porqué de su determinación."
Énfasis añadido.

Esta Autoridad Administrativa, con fundamento en los artículos 33 fracción III, 75 fracción IV y 76 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas resuelve imponer al **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS**, con Registro Federal de Contribuyentes **RERM750209PA0**, **sanción administrativa consistente en INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO POR UN TÉRMINO DE TRES MESES**, sanción que se impone de conformidad con los considerandos de la presente resolución administrativa, en los cuales además se indican los motivos y fundamentos legales que dan lugar y procedencia a dicha sanción administrativa.



**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: **PA-0048/2018**

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Autoridad estima procedente resolver y así;

RESUELVE

PRIMERO.- Esta Autoridad es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 37 fracciones XII, XVIII y XXIX y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 62 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 34 de su Reglamento; en correlación con el numeral 46 de la "Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal", publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de agosto de dos mil dieciocho; 1, 3 fracción XXI, 9 fracción II, 10, 90, 111, 112, 113, 208 fracción X y demás relativos y aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 3 apartado C, 5 fracción III inciso d y 98 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, así como por el artículo 36 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil dieciséis.

SEGUNDO.- Esta Autoridad, en función de las constancias de autos y acorde con lo fundado y motivado en la presente resolución administrativa, **DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE** al **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS**, con Registro Federal de Contribuyentes **RERM750209PA0**, quien se desempeñaba como Profesional Dictaminador de Servicios Especializados en el Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en virtud de la omisión de la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de conclusión, la cual está debidamente acreditada en los términos señalados en los propios considerandos de la presente resolución administrativa.

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 33, 75 fracción IV y 76 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas resuelve imponer al **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS**, con Registro Federal de Contribuyentes **RERM750209PA0**, **sanción administrativa consistente en INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO POR UN TÉRMINO DE TRES MESES**, sanción que surtirá los efectos de ejecución en los términos de los artículos 3 fracción XV, 74, 77 y 222 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la cual se impone de conformidad con los considerandos de la presente resolución administrativa, en los cuales además se indican los motivos y fundamentos legales que dan lugar y procedencia a dicha sanción administrativa.

CUARTO.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 208 fracción XI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, **NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE** la



**Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
Área de Responsabilidades**
Expediente Administrativo: **PA-0048/2018**

presente resolución al **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS**, en un plazo no mayor a diez días hábiles.

QUINTO.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, **INFÓRMESE** al **C. JOSÉ MANUEL REBOLLAR ROSAS** que en caso de que lo estime pertinente, podrá interponer el **RECURSO DE REVOCACIÓN** correspondiente o, en su caso, entablar el respectivo **JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO** ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; teniendo para ello, en la primera de dichas vías, quince días hábiles, a partir de que surta efectos la notificación que se le haga de la presente resolución y en la segunda de estas, contará con treinta días hábiles, como lo establece el artículo 13 fracción I inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, situación que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes.

SEXTO.- Inscríbase el nombre del servidor público y las sanciones administrativas que le han sido impuestas, en el "Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas", para los efectos establecidos por los artículos 27 y 59 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

SÉPTIMO.- Infórmese el contenido de la presente Resolución al Área Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, para su conocimiento y efectos a que haya lugar.

OCTAVO.- Archívese el presente expediente administrativo como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvió y firma el Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en su calidad de Autoridad Substanciadora.

ATENTAMENTE


IGNACIO JIMÉNEZ VÁZQUEZ
EL TITULAR